

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310500820160037501, promovido por la señora **BÁRBARA ROSA SIERRA PARRA** en contra de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en contra de la sentencia proferida por el juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los

procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **059**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Bárbara Rosa Sierra Parra instauró acción judicial, pretendiendo la reliquidación de la pensión de jubilación que le fue concedida por la demandada, teniendo en cuenta para ello, todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, tales como asignación básica, extras diurnas y nocturnas, tiempo extra, festivo dominical, nocturno, prima de transporte, manutención, subsidio de transporte, prima de vacaciones, prima de recreación, subsidio de alimentación y aguinaldo, y el pago de los intereses moratorios o la indexación de las condenas.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que laboró al servicio de la demandada desde el 20 de agosto de 1980 hasta el 3 de diciembre de 2007 en calidad de trabajadora oficial, afiliada a la organización sindical “Sindicato de Trabajadores Oficiales de METROSALUD, SINTRAOMMED”, beneficiándose de la convención colectiva de trabajo. Explicó que, en dicha convención, se establece como beneficio una pensión de jubilación a los trabajadores de la empresa cuando cumplan la edad y tiempo de servicios allí establecida y pese a que le fue reconocida por la entidad, fue de manera deficitaria, pues la liquidación de la misma se realizó sobre la asignación básica mensual del último año de servicios, cuanto debe tenerse en cuenta todos los factores salariales.

Admitida la demanda, y notificada a la pasiva, dio respuesta al libelo gestor indicando sobre los hechos narrados:

Acepta la existencia de la convención colectiva de trabajo, pero informa que el mismo texto indica que el salario a tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación, es el promedio mensual que resulta de dividir la asignación básica percibida por el trabajador en el último año de servicio de la entidad, y que en el caso de la demandante fue la suma de \$715.941, sin que se pueda tener en cuenta factores diferentes al salario básico. Explicó, que la prestación reconocida tiene el carácter de compartido con la que reconociere Colpensiones.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas en la demanda e interpuso la excepción de: “prescripción”.

En sentencia proferida el treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, condenó a la accionada a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante, teniendo en cuenta para ello, los conceptos salariales establecidos en la cláusula 44 del pliego convencional, ordenando a la pasiva al pago del retroactivo, la indexación, y continuar con el pago mes a mes.

RECURSO INTERPUESTO

El apoderado de la parte accionada manifestó su inconformidad con la decisión, argumentando que, de acuerdo a la convención colectiva de trabajo, el valor para liquidar la pensión de jubilación especial, es el promedio mensual que resulta de dividir los salarios básicos percibidos por el trabajador en el último año al servicio

de la entidad, y no con valores que no hagan parte del salario básico. Por lo tanto, solicita sea revocada en su integridad la sentencia de primera instancia.

Corrido el traslado para alegar, el apelante solicitó la revocatoria de la providencia, exponiendo que las convenciones colectivas son acuerdos de voluntades para regular las condiciones laborales que han de tener los contratos bajo su vigencia, fundamentado en el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, y, por tanto, lo pactado goza de plena validez, pues los límites de la convención son la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. En atención a ello, insiste que la pensión de jubilación debe liquidarse en atención a los salarios básicos percibidos por la actora en el último año, y una interpretación diferente desborda la cláusula convencional.

La parte actora, solicita se confirme la sentencia, interpretando que a la demandante debe liquidarse su pensión de jubilación, teniendo en cuenta, los factores salariales devengados en el último año de servicio, situación que se ha expuesto en sentencias SL 13585 de 2016, SL 13421 de 2016, SL 3712 de 2021, SL 448 de 2022.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar, si es procedente la reliquidación de la pensión mensual de jubilación de la demandada, teniendo en cuenta para ello, todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado (sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En el caso que ocupa la atención de la sala, no cabe duda que la demandante era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, pues en Resolución 1242 del 21 de diciembre del año 2007, se reconoció el derecho a la pensión de jubilación, prestación de carácter compartible con la pensión de vejez derivada del sistema general de pensiones, pagadera desde el 3 de diciembre del año 2007 en cuantía de \$715.491.

La fuente jurídica de la prestación reconocida por el empleador, fue convencional, y en este contexto, el pago se realizó de manera completa hasta la acreditación del

cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, lo cual, conforme resolución GNR 286684 de 14 de agosto de 2014, allegada al proceso, tuvo lugar desde el 15 de junio del año 2014, y por ello, el empleador quedó con la obligación de cancelar sólo el mayor valor de diferencia entre la prestación inicialmente reconocida, con la generada por el sistema general de pensiones. Siendo importante recordar lo expuesto por la Sala laboral en sentencia SL 3647 de 7 de julio de 2021, la Sala de Casación Laboral explicó:

“...Pues bien, la Sala advierte de entrada que el colegiado de instancia no incurrió en error alguno al reiterar la regla jurídica, en virtud de la cual, las pensiones convencionales reconocidas con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año son, en principio, compartidas con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales, salvo que las partes de la negociación colectiva pacten lo contrario...”

Teniendo un contexto claro de la prestación que fue reconocida, bajo los parámetros de la compartibilidad pensional, se centra el conflicto, en la lectura del pliego convencional aportado, convención colectiva de trabajadores, 2005-2007, páginas 37 a 63 del expediente digital, la cual consta con su constancia de depósito ante el entonces Ministerio de la Protección Social el día 15 de febrero de 2005, que, a su letra indica respecto a la CLAUSULA DIECIOCHO:

“Esta cláusula fue subrogada por el laudo arbitral expedido el 6 de diciembre de 1999, quedando así:

A. Las pensiones especiales establecidas en la cláusula número dieciocho (18) de la convención colectiva de trabajo se continuarán reconocimiento a los trabajadores que reúnan los requisitos señalados en ella, hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000)

B. *A partir del primero (1) de enero del año dos mil uno (2001) cuando el trabajador al servicio de METROSALUD reúna el tiempo de vinculación laboral de veinticinco años (25) continuos o discontinuos y tenga cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre o cincuenta años de edad (50) si es mujer, tendrá derecho al reconocimiento por la empresa de la pensión de jubilación voluntaria y temporal, desde el momento de su retiro y hasta que reúna los requisitos para obtener la pensión de vejez a cargo de seguridad social, momento en el cual, cesará la obligación a cargo de la entidad. La pensión tendrá un valor equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del salario del último año de servicio. Durante su reconocimiento la entidad pagará el aporte por I.V.M.*

Si durante el lapso de reconocimiento de esta prestación se produce la muerte del pensionado, la pensión legal de superviviente sustituye aquella.

El tiempo de vinculación al Municipio de Medellín se contará para este beneficio.

C. *Las pensiones de jubilación de los trabajadores vinculados a partir del 1 | de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) se regirán íntegramente por el sistema de seguridad social.*

PARAGRAFO: En los casos de reconocimiento de la pensión y demás prestaciones, se dará prelación al trabajador oficial, para lo cual, se tramitarán con la debida antelación a la desvinculación y se pagarán dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en el que el trabajador acredite los requisitos exigidos, siempre y cuando no se presenten circunstancias de fuerza mayor que impidan el cumplimiento por parte de la Administración de los términos aquí establecidos”

La lectura anterior, infiere claridad respecto a los parámetros para el reconocimiento de la prestación, pero causa controversia entre las partes la interpretación que debe darse al enunciado: “*La pensión tendrá un valor equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del salario del último año de servicio.*”

La convención, como acuerdo con carácter vinculante entre las partes, debe ser interpretado conforme a la intención que se tenía al momento de su elaboración, y no en cuanto a la su literalidad, quedando también en manos del juzgador la formación de su libre convencimiento. Sobre el tema, en sentencia rad. 39608 de 2013, se puntualizó:

“Para resolver los cargos, sobre todo los planteados por la vía indirecta, es pertinente recordar que la Corte ha sostenido reiteradamente que cuando el ataque se plantea por esta vía, no es cualquier error del Tribunal el que da al traste con su decisión, sino únicamente aquél que tenga la calidad de manifiesto; es decir, el que resulte patente y protuberante o brote automáticamente o a golpe de ojo del simple examen del medio demostrativo apreciado equivocadamente o dejado de estimar.

De igual modo, se impone tener en cuenta que la Corte ha sostenido que no constituye finalidad del recurso de casación fijar el sentido que las cláusulas convencionales tienen como normas jurídicas, puesto que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del Derecho del Trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales sustantivas de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran las que están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance. Dentro de ese marco, interesa precisar que la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada estimación como prueba de alguna estipulación de esos convenios colectivos.

Así mismo, cabe reiterar que en aquellos casos en que la misma disposición convencional admita diferentes interpretaciones, el hecho de que el juzgador opte por una de ellas no puede constituirse en un error de hecho evidente, por cuanto, como lo ha sostenido esta Corporación, esos distintos significados implican que no pueda configurarse un yerro de la indicada magnitud, ya que el mismo solo se produce cuando el juez le asigna al texto normativo un alcance absolutamente descabellado, ajeno a la intención de los contratantes o al tenor literal del contrato, lo cual no se da en esta ocasión, dado que el ad quem acogió uno de los alcances razonables y plausibles que admite el precepto convencional referido.

No está demás señalar que la estimación que haga el juzgador de la cláusula de una convención colectiva de trabajo, está enmarcada dentro de la facultad de apreciar de manera libre y razonada los medios probatorios, que confiere a los jueces laborales el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que sólo puede merecer el repudio

ante el tribunal de casación en la medida en que la interpretación que se imparta sea disparatada y absurda, situación que aquí no ocurre.

En consecuencia, no es constitutivo de un desacierto evidente concluir, como lo hizo el Tribunal, que de ese beneficio disfrutaban los ex trabajadores de esa empresa que tuvieran más de 10 años de servicio y menos de 20 y 50 años de edad, puesto que al aludir el artículo 42 de la convención a “b) Los empleados que presten o hayan prestado” (folio 59), resulta razonable entender que no se quiso excluir a aquellos, por lo que ello descarta de plano que la interpretación del Tribunal sea descabellada.

Es cierto que esta Sala de la Corte ha considerado que interpretaciones como las propuestas por la parte recurrente son admisibles. Pero ello no significa que la efectuada por el Tribunal resulte inaceptable o carente de todo sustento, sin que ese razonamiento sea contradictorio, pues simplemente refleja la inveterada posición de la Corte en el sentido de que no puede injerirse en el ejercicio interpretativo que hacen los jueces de instancia de las cláusulas convencionales, si el mismo resulta razonable y encaja en las posibilidades hermenéuticas del texto, aun en el evento de que la Corte no lo comparta. Incluso sobre la cláusula en mención, la Sala ha respetado los diferentes ejercicios realizados por los juzgadores de instancia, siempre que no riñan con la lógica, ni resulten contrarios al tenor o espíritu de la estipulación contractual.

En síntesis, no observa la Corte error de hecho alguno, y mucho menos con el carácter de evidente, manifiesto o protuberante, en la fijación del alcance de la estipulación convencional efectuada por el Tribunal.

Por ello, es absolutamente viable dirigirse al texto del mismo acuerdo convencional para interpretar la referencia de la cláusula dieciocho (18) con la palabra “salario”, encontrándose, en la cláusula cuarenta y cuatro lo siguiente:

“CLAUSULA CUARENTA Y CUATRO: La prima de navidad, el aguinaldo, la prima extra, el tiempo extra, festivo, dominical y nocturnidad, la prima de transporte y manutención, el Subsidio de transporte y la prima de vacaciones, son prestaciones sociales que constituyen factor salarial”

De la lectura clara del mismo texto convencional, se esgrime cuáles son las prestaciones que constituyen salario, y que por ende se entienden como tal, las que, precisamente, utilizó la juez de primera instancia en su sentencia, para ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación, y si bien la pasiva enuncia que se debe entender como tal el salario básico, dicha palabra NO se encuentra en la CLÁUSULA DIECIOCHO. Empero, como se indicó anteriormente, la designación de salario si lo está en la misma convención, pues sin necesidad de esfuerzo interpretativo alguno se lee lo que debe denominarse como componente de la palabra “salario”, interpretación, que ni siquiera tiene que realizarse bajo los parámetros del artículo 53 de la Carta Magna, sino, de la designación que el arreglo convencional contrae, por lo cual, comparte la Sala la decisión tomada por la Juez de primera instancia.

Respecto a la indexación ordenada, la sentencia SL 359 de 2021, la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó su procedencia inclusive cuando no es solicitada por las partes, pues su condena vela por los principios de equidad e integralidad del pago.

Se confirmará por las razones expuestas la sentencia proferida el treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

Costas a cargo del apelante, vencido en el recurso de alzada.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del apelante, en la suma de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3c6634a1ecf2443f4351064c362d7c1e6c2c41b4da1b4cfe67e92df0805dac6b**

Documento generado en 09/03/2023 02:18:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>